



Asamblea General Consejo de Seguridad

Distr. general
5 de octubre de 2021
Español
Original: inglés

Asamblea General
Septuagésimo sexto período de sesiones
Tema 78 a) del programa
Los océanos y el derecho del mar: los océanos y el derecho del mar

Consejo de Seguridad
Septuagésimo sexto año

Carta de fecha 30 de septiembre de 2021 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas

En relación con mi carta de fecha 13 de julio de 2021 ([A/75/961-S/2021/651](#)) y con la carta de la Representante Permanente de Grecia de fecha 27 de julio de 2021 ([A/75/976-S/2021/684](#)), quisiera, siguiendo instrucciones de mi Gobierno, señalar a su atención lo siguiente.

Es lamentable que la Representante Permanente de Grecia, en su carta mencionada anteriormente, siga tratando de justificar la violación grave, en la que Grecia sigue incurriendo, de las disposiciones de desmilitarización previstas en los Tratados de Paz de Lausana, de 1923, y de París, de 1947. Turquía rechaza todos los argumentos y acusaciones que figuran en dicha carta y desea subrayar las seis cuestiones jurídicas que se exponen a continuación.

En primer lugar, el artículo 12 del Tratado de Lausana de 1923 confirmó la decisión adoptada el 13 de febrero de 1914 por la Conferencia de Londres por la que se cedieron a Grecia algunas islas del mar Egeo, a condición de que se desmilitarizaran. Como consta en la letra del Tratado de Lausana, y como se desprende de la forma en que este confirma la decisión de 1914, la soberanía de Grecia sobre las islas dependía, y sigue dependiendo, de dicha desmilitarización. Grecia sostiene que su soberanía sobre las islas del Egeo oriental no está vinculada al mantenimiento de la condición de zona desmilitarizada de las islas, lo cual carece de fundamento jurídico. El artículo 12 del Tratado de Lausana establece de forma inequívoca (en parte mediante la referencia a la decisión de 1914) una clara conexión entre la soberanía y la desmilitarización para todas las islas del Egeo oriental. El artículo 13 del mismo Tratado define con más detalle la condición de zona desmilitarizada de las islas de Mitilene, Quíos, Samos e Icaria, precisando las restricciones relativas a tal condición. Por su parte, Lemnos y Samotracia están sometidas (en virtud de la Convención de 1923 relativa al Régimen de los Estrechos Turcos) a un régimen aún más estricto, debido a su proximidad al territorio continental turco.



En segundo lugar, la Convención de Montreux, de 1936, estableció un nuevo régimen únicamente para los estrechos turcos: en ella no se establece específicamente que ninguna disposición u obligación anterior en materia de desmilitarización que impusiera obligaciones a Grecia hubiera dejado de tener efecto. Como se desprende del preámbulo de la Convención de Montreux (y del contexto más amplio), las partes en la Convención se limitaron a acordar entre sí un régimen diferente con respecto a Turquía. Es por ello que el preámbulo se refiere únicamente a la regulación del paso y la navegación en los estrechos en el marco de la seguridad de Turquía y, en lo que se refiere al Mar Negro, de la seguridad de los Estados ribereños respecto del Mar Negro. Esta referencia al Mar Negro excluye a Grecia, y además no hace alusión alguna a la seguridad de Grecia. Por lo tanto, la Convención de 1936 no podía poner fin o derogar en modo alguno las obligaciones de desmilitarización que pesaban sobre Grecia, según lo establecido en la Convención de 1923. La Convención de Montreux de 1936 faculta únicamente a Turquía para remilitarizar la zona de los estrechos, y no contiene ninguna disposición de este tipo, ni explícita ni implícita, con respecto a Grecia.

En tercer lugar, no se puede interpretar que los compromisos políticos no formulados durante las negociaciones o las conversaciones entre las partes generen obligaciones jurídicas. Además, tal y como subrayó la Sala de la Corte Internacional de Justicia en la controversia sobre fronteras, existe el deber de extremar la precaución antes de otorgar cualquier tipo de validez a declaraciones no dirigidas a ningún destinatario concreto (*I.C.J. Reports 1986*, pág. 554 y ss., en especial pág. 574). En cuanto a la interpretación de las disposiciones sobre desmilitarización que figuran en los instrumentos mencionados anteriormente, la práctica estatal de Turquía hasta la fecha y la práctica estatal de Grecia hasta la década de 1960 invalidan en cualquier caso los argumentos de Grecia a este respecto.

En cuarto lugar, la alegación de que Turquía no puede invocar las disposiciones de desmilitarización del Tratado de Paz de París de 1947 frente a Grecia debido a que Turquía no es parte en el mismo carece de fundamento jurídico. El Tratado de Paz de París de 1947 es un tratado de desmilitarización *in excelsis*: por su propio carácter, es un ejemplo clásico de instrumento convencional por el que se establece un “régimen objetivo”. Como es bien sabido, el efecto de crear un régimen de este tipo con validez *erga omnes* se concede a los tratados por los que se confiere un estatuto especial a un territorio determinado. Un ejemplo destacado es el caso de las islas Åland, desmilitarizadas conforme a la Convención de 1856 sobre la Desmilitarización de las Islas Åland, que figura como anexo al Tratado de Paz de París de 1856.

En quinto lugar, y como consecuencia de la cuarta cuestión mencionada, la capacidad de estos tratados de crear regímenes objetivos fue confirmada por la Comisión Internacional de Juristas, a la que el Consejo de la Sociedad de las Naciones encomendó en 1920 la tarea de emitir una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos de la cuestión de las islas Åland, que enfrentaba a Finlandia y Suecia. El Comité Internacional sostuvo que las disposiciones de desmilitarización otorgaban a las islas Åland un estatus internacional especial relacionado con consideraciones militares: por consiguiente, cualquier Estado interesado tenía “el derecho a insistir en su cumplimiento” (*League of Nations Official Journal*, suplemento especial núm. 3, 1920, págs. 15, 18 y 19). Según la opinión de la Comisión Internacional, Suecia, aunque no era Estado parte en la Convención de 1856, tenía derecho a exigir que se respetaran las disposiciones relativas a la desmilitarización. Por la misma razón, Turquía, en tanto que Estado interesado, tiene derecho a insistir en que Grecia cumpla con las obligaciones acordadas de desmilitarización a las que está sujeta. Además, Turquía insta a los demás Estados partes en dichos tratados a que inviten a Grecia a cumplir las disposiciones de los mismos.

Al militarizar las islas en cuestión, Grecia ha renunciado a su derecho de hacer valer la oponibilidad a Turquía de los tratados mencionados y a los derechos que pretende derivar de ellos. Como observó la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a Namibia, no se puede reconocer que una parte que reniega de sus propias obligaciones o no las cumple conserve los derechos que dice derivar del instrumento en cuestión (*I.C.J. Reports 1971*, pág. 16 y ss., en especial pág. 46). No cabe duda de que el derecho internacional no admite la injusta situación de que un Estado que incumple las obligaciones que le corresponden en virtud de un tratado siga invocándolo para sus propios fines.

En sexto lugar, es decepcionante que la Representante Permanente de Grecia, en lugar de centrarse en los argumentos jurídicos, haya optado en su carta por hacer absurdas acusaciones políticas en relación con el contexto regional. Además de dejar al descubierto la debilidad de la posición jurídica de Grecia, dichas acusaciones reflejan un estado de ánimo desconectado de la realidad, y no merecen más respuesta.

Turquía insta una vez más a Grecia a que respete las disposiciones sobre desmilitarización de los tratados mencionados y restablezca el régimen de desmilitarización de las islas del Egeo oriental tal como era antes de que se produjeran las violaciones por parte de Grecia.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 78 a) del programa, y del Consejo de Seguridad, y hacer que se publique en el sitio web de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar y en el próximo número del *Boletín del Derecho del Mar*.

(Firmado) Feridun H. Sinirlioğlu
Representante Permanente
